

Multinacionales y Cámaras de empresas extranjeras avisan de que caerá la inversión foránea

pueden financiarse con más impuestos y endeudamiento, lo que va a romper la evolución positiva y lleva a caer en una recesión. Hacer cambios en la reforma laboral crea inseguridad y supone ir hacia atrás". Este directivo avisa: "Si las empresas pagan más impuestos, habrá menos inversión y competitividad".

Jaime Malet, presidente de la Cámara de Comercio de EEUU en España, constata que "las medidas generan preocupación, supondrán más desempleo y lastrarán la inversión", aunque plantea la duda de si se podrán realizar, ya que cree que hay "corsés" como la consolidación fiscal.

Malet alerta del efecto no deseado de una subida del SMI y de que las subidas fiscales desincentivarán la inversión y el talento. Está "totalmente en contra de la *tasa Google* si no se hace en el marco de la OCDE" y recuerda las fricciones que le supone a Francia. De manera similar se pronuncia Alicia Richart, presidenta de Digitales.

Las recetas para favorecer la creación de empleo de Beatriz Blasco Marzal, presidenta de Multinacionales por Marca España, "simplificar la contratación, aumentar la flexibilización y reducir costes indirectos" son de signo contrario a la contrarreforma laboral. Cree que "el equilibrio de las cuentas públicas no debe basarse en mayores aumentos impositivos, que desincentivan la actividad económica y deslocalizan capital y talento, sino en optimizar el gasto".

Antonio Barderas, director de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar-AMEF, ve "la situación francamente preocupante. El respeto a la ley y a la Constitución es la base de la libertad y la igualdad de todos los españoles", subraya. En el ámbito económico, cree que se pone "en riesgo la seguridad jurídica y la economía de mercado". Y alerta de la armonización al alza de impuestos autonómicos que "exigen los mismos que defienden el federalismo y se apoyan en los separatistas". "Un error gravísimo" que lastrará las competitividad de todas las CCAA, advierte Miguel Garrido, presidente de CEIM.



Felipe VI y Pedro Sánchez, ayer en el Palacio de la Zarzuela, tras prometer el líder del PSOE su cargo como presidente del Gobierno.

El Rey a Sánchez: "Ha sido rápido y simple... el dolor viene después"

EN EL PALACIO DE LA ZARZUELA/ El líder del PSOE prometió ayer ante Felipe VI su cargo como presidente del Gobierno en un breve acto en el que ambos aparcaron la frialdad mostrada durante la Pascua Militar.

J.D. Madrid

Tras el frenético proceso de investidura y su ceñida victoria, Pedro Sánchez prometió ayer ante Felipe VI su cargo como presidente del Gobierno. Frente a la frialdad en el trato que ambos se dispensaron el lunes pasado durante la ceremonia de la Pascua Militar, cuando el Rey reafirmó el compromiso del Ejército con España y con la Constitución, Monarca y presidente electo se permitieron ayer un fugaz intercambio de bromas... con posible doble lectura. "Ocho meses para diez segundos", comentó Sánchez al Monarca en referencia al prolongado lapso en que ha desempeñado en funciones su cargo (desde los comicios de abril) y la brevedad del acto en el que ayer prometió "cumplir fielmente" sus obligaciones como jefe del Ejecutivo "con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado". Unas palabras a las que el Monarca respondió: "Ha sido rápido, simple y sin dolor"... para acto seguido añadir que "el

dolor vendrá después", con un apunte de la sorna flemática (¿ironía?) característica de su padre, el Rey emérito Juan Carlos I. "La ironía es una tristeza que no puede llorar y sonríe", decía el dramaturgo y Nobel de Literatura Jacinto Benavente.

Con independencia del significado exacto del comentario del Monarca, más allá de lo obvio, de que lo difícil co-

mienza a partir de ahora (gestionar un Gobierno cogido con pinzas y subordinado al secesionismo), lo cierto es que las relaciones entre el Ejecutivo socialista y la Casa Real han conocido tiempos mejores. La oposición ha criticado con dureza la pasividad de Sánchez ante los ataques a la monarquía proferidos por EH Bildu durante el debate de investidura, cuando la di-

putada *abertzale* Mertxe Aizpurua calificó a Felipe VI de "autoritario". El PP prolongó ayer los reproches y acusó a Sánchez de prometer defender la Carta Magna ante el Rey "y hacer lo contrario al salir de Zarzuela". A este respecto, el portavoz de los populares en el Senado, Javier Maroto, instó al presidente del Gobierno a que "además de decirlo, lo haga", subrayan-

do que los socios con los que pactó su investidura "ni guardan ni quieren hacer guardar la Constitución", en alusión a Unidas Podemos y ERC.

Sobre el Ejecutivo de coalición PSOE-Podemos, el dirigente popular atribuyó la decisión de Sánchez de posponer a la semana que viene el anuncio de la composición de su gabinete a los primeros roces con su socio morado y, en concreto, a la filtración de los nombres de sus ministros y secretarios de Estado. "Se están tirando de los pelos antes de empezar y esto tiene un nombre, que es minicrisis", afirmó Maroto. En otras palabras, en versión de los populares este retraso sería un golpe en la mesa de Sánchez para evidenciar que él es el presidente del Gobierno y, por tanto, quien marca los tiempos. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, intentó quitar hierro al adelantamiento mediático de Podemos, pero deslizó una frase que es todo un aviso a navegantes: "La política también son formas y conviene no saltárselas".

Protocolo para evitar contradicciones... y roces

Los socios del flamante Ejecutivo de coalición rubricaron ayer su propio código de *buen gobierno* para coordinar sus actuaciones, unificar criterios y consensuar sus posiciones; es decir, fijaron el perímetro del que no debe salirse el pacto entre PSOE y Podemos para no incurrir en contradicciones, especialmente en cuestiones que puedan tener una "alta repercusión

en la escena política". El protocolo contempla la creación de una mesa de seguimiento permanente que velará por la buena marcha de la coalición, el cumplimiento de los acuerdos alcanzados y en la que se solventarán las discrepancias entre las partes. Y otra comisión de seguimiento parlamentario, que se creará en los próximos 30 días, por la que se comprometen al mutuo

apoyo, "con unidad de criterio y de sentido de voto" sobre la acción de Gobierno, y a consensuar y fijar sus posiciones frente a las propuestas de terceros (podrán votar distinto). Para evitar discordancias, los miembros del Ejecutivo se "comprometen a mantener una estrategia de comunicación coordinada", que obligará a los ministros a comunicar con antelación los "principales anuncios".